

[13]

Siempre encontré simpatía en el congreso por San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Me llamo Julio Gallardo. Nací en 1956, en San Andrés, en el sector de North End, como toda mi familia, que es enteramente nativa. Mi bisabuelo, Domingo Gallardo, vino de Cartagena a finales del siglo XIX, como prefecto. Mi abuelo, Julio Gallardo, fue comerciante pero, por su prestancia en los negocios, varias veces fue miembro y presidente del concejo intendencial. Mi padre, Adalberto Gallardo, ha sido médico y desde joven le gustó la política. Fue intendente, secretario general del ministerio de salud y el primer representante a la cámara por el archipiélago. Yo viví de los 10 a los 22 años en la capital. Hice el bachillerato en el colegio La Salle de Bogotá. Me gradué como abogado en la Universidad Libre de Bogotá y ahí mismo hice una especialización en derecho procesal. Tan pronto me gradué fui, por dos años, inspector de relaciones colectivas de trabajo en Bogotá. Después, me nombraron director del Seguro Social en San Andrés, cargo que ejercí durante seis años y medio. Después, me involucré en la política. Estuve tres períodos consecutivos en el concejo intendencial y fui su presidente. De 1991 a 1998, estuve en la Cámara de Representantes y llegué a ser vicepresidente de la corporación. Siempre, desde 1985, cuando creamos el Movimiento Integración Regional, me he presentado por esa agrupación política suprapartidista. Yo fui coordinador departamental en el archipiélago de las dos campañas presidenciales de Andrés Pastrana. Pero he votado indistintamente por liberales o conservadores. En la cámara tuve participación como autor o ponente de normas para el archipiélago y logré su aprobación. Lo que hice en el congreso fue elevarlas a ley de la República y darles así un sustrato más fuerte. Ahora, estoy volviendo a aspirar a la cámara.*

Mi bisabuelo, Domingo Gallardo, llegó a finales del siglo XIX. Venía de Cartagena como prefecto. Así se llamaba el funcionario público que en ese entonces dirigía la entidad territorial denominada prefectura. Mi abuelo, Julio Gallardo, fundó el almacén Bogotá, en 1920. La familia siempre ha tenido clara la relación con el continente. Por su prestancia en los negocios, varias veces fue miembro y presidente del concejo intendencial. El realizaba comercio con Centroamérica y tenía barcos en los que sacaba productos de San Andrés hacia Bluefields, Puerto Limón, Colón, Cartagena. Era conocido como el capitán Gallardo en algunas regiones del Chocó. Mi padre, Adalberto Gallardo, ha sido médico y desde joven le gustó la política, tal vez porque su profesión tiene mucho que ver con el servicio a la comunidad. El ejercía la medicina y la combinaba con la política. Fue intendente, secretario general del ministerio de salud y el primer representante a la Cámara por el archipiélago. Por línea materna, mi familia es de Providencia, descende de los primeros Archbold, que llegaron a la isla en el siglo XVIII. Por tradición, de ambos lados de mi familia somos católicos.

El primer idioma que hablé fue el creole y cuando entré al colegio no hablaba castellano. Como para todos los demás, para mi aquello produjo un choque cultural. Yo estudié, primero, en el colegio de la Sagrada Familia, luego, en el Bolivariano e hice el bachillerato en el colegio La Salle de Bogotá. Me gradué como abogado en la Universidad Libre de Bogotá y ahí mismo hice una especialización en derecho procesal. Tan pronto me gradué fui, por dos años, inspector de relaciones

* Fue elegido y está como representante del archipiélago.

colectivas de trabajo en Bogotá. Viví de los 10 a los 22 años en la capital. Después, me nombraron director del Seguro Social en San Andrés, cargo que ejercí durante seis años y medio.

El político

Después de dejar el cargo público me involucré en la política. Estuve tres períodos consecutivos en el concejo intendencial y fui su presidente. De 1991 a 1998, estuve en la Cámara de Representantes y llegué a ser vicepresidente de la corporación.

Para el período siguiente no fui reelegido. Como no tenía cargo público y estaba sólo dedicado a ejercer la profesión, cuando se presentó la interinidad en la gobernación por la destitución de Leslie Maffya Bent, me postulé como candidato a gobernador, pero tampoco en esa ocasión fui elegido. Decidí presentarme porque creí que, con la experiencia y el conocimiento que tengo, podía cumplir una buena tarea en un momento crucial del departamento. Los exámenes de los políticos son las elecciones, pero en esas dos ocasiones, a pesar de estar muy preparado, sucedió como en el colegio, que, a veces, al profesor, que en este caso era la comunidad, no le gustan las respuestas de uno. Unas veces se vota por el estómago, otras por el corazón y unas cuantas por la razón.

Siempre, desde 1985 cuando creamos el Movimiento Integración Regional, me he presentado por esa agrupación política suprapartidista. Mi formación política es conservadora. Tengo la convicción de que la democracia, el orden y la libertad en el manejo económico son indispensables. El mercado debe regular la economía y el Estado garantizarle a los asociados niveles adecuados de salud, educación, seguridad, justicia. Eso como fundamento ideológico, porque en la parte política he votado indistintamente por liberales o conservadores, aunque mi familia ha sido siempre conservadora y mantenemos todos los vínculos con la estructura conservadora nacional. Yo fui coordinador departamental en el archipiélago de las dos campañas presidenciales de Andrés Pastrana. En ese entonces teníamos con Andrés una relación personal y política muy cercana, de muchos años.

Yo me siento satisfecho con todo lo que he podido hacer en la política y por los logros en materia

legislativa. Es motivante haber podido cumplir las metas que me he ido trazando en cada momento. Mi participación en la Cámara fue una época pletórica de logros y satisfacciones a todo nivel: como autor o ponente de normas para el archipiélago, logré su aprobación. Algunas de esas normas ya las había propuesto como acuerdos interdepartamentales. Lo que hice en el Congreso fue elevarlas a ley de la República y darles así un sustrato más fuerte. Es evidente que cada congresista tiene un espectro grande de intereses, pero debo reconocer que fui un privilegiado porque mis colegas aceptaron mis propuestas. Siempre encontré simpatía en el Congreso por San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Mi insatisfacción es por no haber alcanzado a reglamentar más la relación entre la nación y el departamento porque hay muchas cosas que se deben y se pueden hacer al respecto. Ese es el motivo por el cual estoy volviendo a aspirar a la Cámara. La Constitución nos permite un espectro amplio de normatividad especial para el departamento y la Cámara es definitivamente el escenario preciso para sacar adelante las diferentes normas que requerimos. Considero que esas leyes pueden posibilitar relaciones más armónicas entre el Estado y la comunidad. Si no existieran sería más complicado manejar las cosas.

Mi base electoral está repartida entre raizales y continentales. Casi diría que cada uno de esos sectores aporta el 50%, y siempre ha sido así. Ambas comunidades me hicieron perder el examen en las dos elecciones anteriores, pero no creo que los continentales hayan dejado de votar por mí sino que las circunstancias del momento los llevaron a considerar una opción diferente a la mía. La razón por la que la gente no votó por mí en esas dos ocasiones es, más bien, que muchos políticos se dedicaron a desinformar a la comunidad vendiendo la idea de que yo estaba en contra de los continentales, que todo lo que hacía era para favorecer a los raizales. Varios amigos me decían: "póngale atención a eso", pero yo creía que la gente tenía un nivel de conciencia y opinión superior a esos rumores y que no iba a creer en ellos. En realidad, nunca he excluido a nadie de los que legalmente residen en el departamento; al contrario, siempre los incluyo. Ahora hay un fenómeno contrario. Se está sintiendo un malestar por las falencias de la representación y por

una mala administración. La gente se siente engañada pues los pusieron a votar por alguien que no les ha resultado como pensaban.

Yo nunca fui con ninguna fórmula al Senado. Siempre lo hice solo y tuve éxito. Pero cuando a San Andrés llegó la política nacional todo se distorsionó. Antes los políticos del continente eran muy lejanos al archipiélago, sólo estaban pendientes de su departamento. Pero ahora las cosas han cambiado. De hecho, otra circunstancia que influyó en mi derrota en las elecciones para la Cámara fue que el senador guajiro Santander López Sierra entró con recursos y con fuerza al departamento y distorsionó el panorama electoral local. Es el senador que más votos obtiene aquí para el Senado. Los políticos del continente que han estado más relacionados con el archipiélago son Name Terán y Amílkar Acosta. López Sierra solo vino para las elecciones. Roberto Gerlein está llegando. Yo lo invité a que mirara algo de lo que está ocurriendo en las islas.

Las disputas políticas locales

Veo muy negativo el enfrentamiento existente entre la asamblea departamental y el gobernador, Ralph Newball Sotelo. No se corresponde con la estructura institucional. Si esos dos órganos directivos que son coadministradores están en contrapunto la que sufre es la comunidad. Me atrevería a decir que ese enfrentamiento es producto del criterio del gobernador, debido a su falta de experiencia y de manejo político. El considera que no necesita consensos con la asamblea y, a veces, quiere evitar los procedimientos. Esta reflexión no es de ahora sino que siempre en mi carrera he sido respetuoso de las diferentes jerarquías y de la relación entre las diversas instituciones.

Para la próxima elección de gobernador hay algún peligro de polarización. Hay quienes aspiran a ser candidatos y, para generar simpatía, quieren exacerbar la situación. Eso pasa porque no tienen mayores propuestas ni proyectos claros y tampoco cuentan con una base real para manejar el departamento. Se van por las ramas y piden que la gente vote por sus características externas, porque hacen parte de una comunidad, y no por las ideas y los programas del candidato.

El movimiento raizal

Hasta donde yo entiendo, el movimiento raizal no es un movimiento político, sino un movimiento étnico y social. Por lo tanto, sus reivindicaciones son de carácter sectorial. La verdad es que no he sido líder de ese movimiento porque yo soy político y debo ayudar a toda la comunidad. Nunca he aspirado a ser dirigente de ningún movimiento gremial. Tengo que excluirme de participar en movimientos religiosos, cívicos, sociales porque éstos defienden sólo los intereses del sector específico al que representan. Eso es válido y en el país deberían existir muchos movimientos de ese tipo para fortalecer la sociedad civil. Soy amigo de esos movimientos y creo que, dentro del marco de la Constitución y la ley, deben defender sus derechos.

En relación con las demandas del movimiento raizal hay que decir que la Constitución colombiana le garantiza a las entidades territoriales autonomía, participación en la toma de decisiones, gestión de su propio desarrollo. Por eso me parece válido que el movimiento esté proponiendo autonomía en la gestión de su propio desarrollo. No se cuál es el concepto de ellos de autogobierno y autodeterminación. Pero hay que aceptar la realidad: en San Andrés vivimos diferentes comunidades, que compartimos distintos asuntos, y que tenemos problemáticas disímiles que hay que resolver. Existen muchos elementos legales en el país que se pueden utilizar para resolver esos problemas y que no han sido utilizados.

La preocupación por la problemática de las tierras también es justa porque en la medida que los raizales se queden sin tierra van a ser desplazados de su propio territorio. Así que el gobierno debe intervenir para garantizarle, no solo al grupo raizal, sino también a los residentes opciones de vida digna. Aquí el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) debería invertir para la regulación de tierras y con el propósito de defender el bien común. El departamento, como todos los demás, tiene, a partir de la ley 9 de 1989, la posibilidad de crear bancos de tierras, que ya existen en todos los municipios. Lo que falta es plata para comprar la tierra al que la quiera vender, no para expropiar tierras. Eso sería un paso último.

Sobre la reivindicación del territorio, no conozco muy bien las propuestas que ha formulado el movimiento raizal. Se hizo una campaña contra mí entre los comerciantes, residentes y raizales, muy bien orquestada por mis contendores políticos. Alguna gente, que movía dineros de dudosa procedencia, tenía intereses económicos en la isla y no les interesaban las propuestas de mejorar las condiciones de la gente raizal. Querían que ese núcleo humano permaneciera estancado para poder acceder más fácil a sus bienes. En esa época compraron mucha tierra. Ya no, y más bien están engrampados con la tierra que compraron y con la que ya no saben qué hacer.

En cuanto al problema de la población, creo que las normas de migración que tenemos son las más avanzadas del mundo. Son incluso más drásticas que las de Estados Unidos. El problema es que no se aplican, ni en su letra ni en su espíritu. Ahí, en esas normas, se encuentra la solución a muchos de los problemas de población y pueden ser aplicadas sin ofender la dignidad ni los derechos humanos de nadie. Esa norma sigue siendo un instrumento muy bueno, y va a tener que ser aplicada. Otro problema que hay que resolver es el de la natalidad. Antes, la migración era la principal fuente del aumento de población, hoy es más bien el desbordamiento de la natalidad.

La gente tiende a responsabilizarnos a los isleños del no funcionamiento de la OCCRE. Pero la corrupción que ha existido es compartida. Proviene tanto del que "paga por la peca" como del que "peca por la paga". Si el que viene no ofreciera dinero por la tarjeta de residencia no generaría la contravención de la ley. Otro factor que incide en el no funcionamiento de la OCCRE es responsabilidad de los gobernadores, que no la han hecho funcionar, empezando por Simón González, quien debía haber hecho un censo dentro de los tres meses siguientes a la aprobación del decreto de densidad poblacional y un registro de la población en los seis primeros meses, pero no lo hizo por la disputa sobre la conveniencia o inconveniencia de la tarjeta.

Yo he realizado diversas gestiones internacionales, no solo a favor de los raizales sino de toda la comunidad. No he excluido a ningún sector. He ido a hablar de la conservación cultural del grupo

étnico, que es parte de nuestra comunidad y que hay que ayudar y proteger, como dice la Constitución. Eso de que yo sea el vocero internacional del movimiento es de las tantas cosas que se dicen sin fundamento. En algún momento, otros políticos de la comunidad, raizales, decían que yo trabajaba con los comerciantes basándose en las relaciones que tengo con la comunidad árabe.

La demanda de Nicaragua

La demanda de Nicaragua no tiene ningún fundamento ni base. Este territorio nunca ha sido nicaragüense, ni los ancestros nuestros quisieron serlo. No existe ninguno de los elementos territoriales o poblacionales que muestren que esta zona fue de ellos. Más bien toda la costa mosquitia fue colombiana. La aspiración final de Nicaragua es correrse su frontera marítima hacia el este y dominar la plataforma continental para llegar a los supuestos recursos petrolíferos de los cayos. Dicen que Estados Unidos tiene estudios y mapas que mostrarían el posible carácter petrolero de la zona.

Que el movimiento raizal quiera aprovechar la demanda para presionar por sus reivindicaciones, es legítimo. Todos los sectores tienen derecho a solicitar mejoría en su situación social y económica y en su nivel de vida, y es obligación del gobierno atenderlas. Los requerimientos de Nicaragua siempre han servido para satisfacer aspiraciones de mucha gente. En los años ochenta, por ejemplo, inmediatamente después de que los sandinistas dijeran que desconocían el tratado, los militares pidieron presupuesto. Todos tratan de aprovechar su pedacito.

La soberanía se ejerce atendiendo las necesidades de un país, no abandonando sus fronteras, que son una fuente de riqueza por ese intercambio. Pero esta es la única frontera muerta que tiene Colombia. A pesar de todos los problemas que hay con Venezuela, el intercambio en Cúcuta es intenso. Lo mismo pasa en las otras fronteras. Esas circunstancias han ido en detrimento de la calidad de vida y de la economía del mismo país cuando podían ampliar el horizonte de manejo del comercio exterior. Eso es algo que hay que resolver. Tenemos que revitalizar nuestra frontera insular con el Caribe.